

Chillán, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.-

EN CUANTO A LA APELACION:

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

1º.- Que la parte demandada ha deducido recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia dictada, sosteniendo que la parte demandante carece de interés jurídico para demandar en esta causa, ya que el interés debe ser actual, patrimonial y debe existir a la fecha de celebración del contrato impugnado, siendo que en el presente caso la demandante carecía de interés al momento de celebrarse el contrato de 13 de Febrero de 2007, pues este solo nació casi 7 años después de la celebración de dicho contrato, con motivo del fallecimiento de la cedente doña Aída Rodríguez Alonso. Un interés nacido con posterioridad al contrato y por tanto desvinculado de éste, no tiene conexión con el contrato y no cumple con la exigencia del artículo 1683 del Código Civil.

2º.- Que la sentencia de primer grado discurre sobre la base de entender que la parte demandante acreditó la calidad de heredera de doña Aída Rodríguez Alonso y en consecuencia tiene un interés jurídico de índole patrimonial exigido por la ley para ser procedente su acción de nulidad, pues a través de ella pretende dejar sin efecto el contrato de 13 de Febrero de 2007, en virtud del cual determinados bienes no pasaron a integrar la comunidad hereditaria formada por la muerte de la causante.

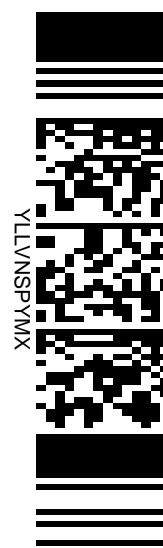
3º.- Que, en consecuencia, del mérito de los argumentos del recurso deducido y de los fundamentos del fallo recurrido, aparece que la controversia a resolver radica, en primer término, en determinar si la demandante posee el interés que el artículo 1683 del Código Civil exige para impetrar la nulidad absoluta del contrato impugnado.



4°.- Que, el profesor Arturo Alessandri Besa, en su libro “La Nulidad y la Rescisión en el Derecho Civil Chileno”, Tomo I, tercera edición, pagina 526, indica que por regla general, los principales interesados en que se declare nulo un acto o contrato son las personas que lo han ejecutado o celebrado, pero a su lado existen otros sujetos, que por estar ligados jurídicamente en alguna forma a ellas, tienen interés en que se declare esa nulidad para mantener intacto el patrimonio de los contratantes o del autor o autores del acto, como por ejemplo los causahabientes o los sucesores de aquéllos. Entre las personas más interesadas en que se declare judicialmente la nulidad de un acto o contrato ejecutado por una persona se encuentran sus herederos, a quienes les importa mucho que el patrimonio de su causante no sufra mermas, que a la larga redundarían en perjuicios de ellos, pues la cuantía de la herencia disminuiría.

5°.- Que el interés que invoca la actora emana de su calidad de legitimaria de la cedente, postulando que tal circunstancia es la que la autoriza a perseguir la declaración de nulidad del acto cuestionado. Luego, la controversia se circunscribe a determinar si es posible invocar tal calidad para obtener la invalidación de un acto cuyos efectos se dicen perniciosos para la legitimaria, en cuanto disminuye o resta de su haber determinados bienes, los que, sin mediar el acto cuestionado, hubiesen ingresado a su patrimonio, en la proporción correspondiente, por el modo de adquirir denominado sucesión por causa de muerte.

6°.- Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1181 y siguientes del Código Civil, la legítima es una asignación forzosa y preferente, constituida por una cuota de los bienes de un difunto y que la ley reconoce la calidad de legitimario de una persona desde el momento en que nace alguna de las



relaciones de parentesco que la vincula con quien será su causante, según lo previsto en el artículo 1182 del mismo texto legal.

Que aun cuando el derecho de los herederos no pueda surgir sino cuando se abra la sucesión del causante, no se discute en doctrina que la legítima existe en vida de éste y la calidad de legitimario, como vínculo que genera intereses jurídicos, está reconocida y protegida legalmente desde su origen, según se desprende de lo dispuesto en los artículos 1186, 1187, 1200, 1204, 1216, 1463 inciso 3° del Código Civil.

7°.- Que, entonces, es efectivo que mientras no se produzca la muerte del causante los legitimarios no tienen todavía un derecho cierto en su contra, pues sólo el fallecimiento de aquél se confirmará esa prerrogativa que hasta entonces habrá tenido carácter condicional, por lo que no podrían impugnar los actos de disposición de bienes que éste realice durante su vida. Pero una vez acaecida la muerte del causante, se consolida el derecho de los herederos forzosos y es por ello que la ley les confiere protección otorgándoles acciones tales como aquéllas que les autorizan para pedir la reforma del testamento que perjudique sus legítimas o para solicitar la restitución de los bienes que el causante haya donado en perjuicio de tales asignaciones.

Por esa misma razón es que debe concluirse que la demandante, en su calidad de heredera forzosa de su madre fallecida, en virtud de la relación jurídica que la vincula, tiene comprometido un legítimo interés de contenido patrimonial que la habilita para ejercer la acción de nulidad intentada, tendiente a obtener que se deje sin efecto un negocio celebrado por su madre, sin los requisitos legales, por el cual se transfieren ciertos bienes al demandado, los que no llegaron a



integrar el activo de la comunidad hereditaria, que nace a la vida jurídica con la muerte de la causante.

Así lo ha sostenido la Excma. Corte Suprema en las causas rol N° 2749-2013, por sentencia de 21 de Julio de 2014, y en causa rol N° 808-2018, por medio de sentencia de 11 de Julio de 2019.

8°.- Que, en conclusión, según la doctrina y jurisprudencia, el “interés” a que se refiere el artículo 1683 del Código Civil para alegar la nulidad, además de ser de carácter patrimonial, de residir precisamente en la obtención de la nulidad absoluta del acto o contrato, de ser real y no meramente hipotético y tener su origen en la lesión patrimonial que sufre el interesado por la ejecución del acto o la celebración del contrato, debe ser “legítimo” , esto es, que se funde en un derecho actual, coetáneo y no sobreviniente a la celebración del acto que se pretende anular y mantener actualidad a la fecha en que se pide la declaración de nulidad.

9°.- Que, en consecuencia, debe concluirse que doña Aída Rodríguez Alonso pudo disponer libremente de su patrimonio, no obstante la relación que la ligó con la actora, en tanto legitimaria. Luego, en vida de la causante, la calidad de legitimaria de la demandante no la autorizaba para instar en la declaración de nulidad del acto en cuestión. Pero al fallecer la contratante y consolidarse la condición de legitimaria de la actora, sí ostenta un legítimo interés en su pretensión de anular los actos de disposición patrimonial que la causante celebró, interés que ya existía al momento de celebrarse el acto simulado y que ha podido invocar una vez fallecida dicha contratante.



10°.- Que, respecto de la excepción de cosa juzgada planteada por la parte demandada, estos sentenciadores concuerdan con los razonamientos de la juez a quo para desestimarla.

11°.- Que, en cuanto a lo sostenido por el apelante, en el sentido que la prueba rendida por la contraria resulta insuficiente para acreditar los supuestos facticos que permitan acoger la acción interpuesta, estos sentenciadores discrepan de ello y concuerdan con las conclusiones de la sentenciadora y especialmente con lo señalado en el considerando trigésimo tercero, en el sentido que existen presunciones que, en los términos del artículo 1712 del Código Civil, reúnen las características de ser graves, precisas y concordantes en orden a demostrar que al 13 de febrero del año 2007, la señora Aída Rodríguez Alonso no estaba en uso de sus plenas facultades mentales que le hubiesen permitido concurrir con su voluntad a la celebración del contrato suscrito aquél día, mediante el cual ella cedió y transfirió sus derechos en la sociedad “Inmobiliaria Aída Rodríguez Alonso E.I.R.L”, en un 1% a su hijo José Antonio Vallejo Rodríguez, y en un 99% a la sociedad perteneciente a éste, “Inmobiliaria Asturias Dos Limitada”, faltando, de esa manera, en la formación del referido contrato, un elemento esencial del mismo cual es, la voluntad de una de las partes.

EN CUANTO A LA ADHESION A LA APELACIÓN.-

VISTO:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del párrafo final del motivo tercero, que se elimina;

Y TENIENDO EN SU LUGAR PRESENTE:



12°.- Que la parte demandante acompañó con fecha 12 de Octubre de 2017, copia del informe pericial realizado por el perito Eduardo Osorio Uribe y también informe pericial del perito Wenceslao Vásquez Seguel, evacuados en los autos rol N° 2365-2008 del 2° Juzgado Civil de Chillán, caratulados “Vallejos con Vallejos y otra”.

13°.- Que la parte demandada los objetó por no tener el carácter jurídico de peritajes, pues fueron decretados después de vencido el probatorio de la causa rol N° 2365-2008 y tampoco provienen de una medida para mejor resolver, habiéndose realizado extemporáneamente. Como documentos son privados y su parte no los reconoce para ningún efecto legal y los objeta por falsedad, solicitando se les resta valor en el presente juicio.

14°.- Que, en la sentencia dictada en la causa Rol N° 2365-2008 del 2° Juzgado Civil de esta ciudad, caratulada “Vallejos con Vallejos y otra”, se aprecia que la demandada de aquella causa objeto los peritajes ahora acompañados como documentos en la presente causa, siendo rechazada la objeción en dicha sentencia.

15°.- Que, la sentenciadora a quo acogió la objeción planteada por la parte demandada, en razón que dichos peritajes no fueron ordenados en su oportunidad como medida para mejor resolver, alzándose la parte demandante en contra de esta resolución.

16°.- Que, habiéndose desestimado las objeciones a los peritajes en la causa donde se realizaron, no cabe ahora acoger la objeción por ser extemporáneos, razón por la cual se desestimaré la objeción planteada en esta causa por la parte demandada.



Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto en los artículos 186 y 227 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que **SE REVOCA** la sentencia apelada de veintidós de Septiembre de dos mil dieciocho, escrita de fojas 822 a 860, en cuanto por su decisión II acoge la objeción interpuesta por el demandado respecto de los peritajes de los señores Osorio y Vásquez, y en su lugar se declara que **SE DESESTIMA** dicha objeción.

II.- Que **SE CONFIRMA, en lo demás**, la referida sentencia de veintidós de Septiembre de dos mil dieciocho, escrita de fojas 822 a 860.

III.- Que **se condena en costas** del recurso a la parte demandada.

Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción del Ministro don Guillermo Arcos Salinas.-

Rol N° 517-2018.- CIVIL.-





YLLVNSP YMX

Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Claudio Patricio Arias C. y los Ministros (as) Dario Fernando Silva G., Guillermo Alamiro Arcos S. Chillan, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.

En Chillan, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora visualizada corresponde al horario de verano establecido en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>